



CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

ORDEN

825/2027

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Expte.: 002/2027

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIVISION DE CONTRATACION

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato de concesión de servicios titulado **“EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE CUATRO ALBERGUES Y UN REFUGIO JUVENIL TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID” (5 LOTES)**, a propuesta de la Secretaría general Técnica, y que se adjudicará mediante procedimiento abierto, con pluralidad de criterios al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

El objeto del contrato consiste en la concesión del servicio de explotación y gestión de los cuatro albergues y el refugio juvenil de titularidad autonómica dependientes de la Dirección General de Juventud, incluyendo la prestación de los servicios de alojamiento, manutención, limpieza, mantenimiento y atención al usuario, así como todas aquellas actuaciones necesarias para el funcionamiento de las instalaciones en los términos establecidos en los pliegos.

La explotación de los albergues juveniles dependientes de la Dirección General de Juventud se ha venido desarrollando mediante gestión directa por parte de la Administración. Sin embargo, la evolución de las necesidades del servicio y la creciente complejidad de su gestión obligan a reconsiderar este modelo de gestión.

De esta manera, los principios de eficacia y eficiencia que rigen la actuación administrativa aconsejan adoptar fórmulas de gestión que permitan ajustar los recursos a las necesidades reales del servicio y asegurar su sostenibilidad económica.

La Ley de Contratos del Sector Público, define el contrato de concesión de servicios como aquel mediante el cual la Administración encomienda a título oneroso a un operador la gestión de un servicio de su titularidad, recibiendo éste como contraprestación el derecho a explotarlo, con la consiguiente asunción del riesgo operacional.

La actividad de los albergues juveniles encaja plenamente en esta forma contractual, ya que se trata de un servicio susceptible de explotación económica y sujeto a variaciones en su utilización a lo largo del año. La normativa establece que, en estos casos, la retribución del concesionario se vincula al resultado de la gestión y no a un pago garantizado por parte de la Administración, lo que permite articular una prestación más eficiente y acorde con la naturaleza del servicio.

Este modelo posibilita que un operador especializado organice de manera integrada los medios necesarios para la explotación y asuma las contingencias propias de la actividad, mientras la

Administración mantiene la titularidad del servicio y su función de control.

La utilización de un modelo de concesión contribuye a una gestión más eficiente de los recursos públicos, al desplazar al concesionario los costes asociados a la explotación ordinaria y permitir una estructura operativa flexible que se adapta a la demanda efectiva de las instalaciones. Este enfoque favorece una reducción del gasto público, incrementa la capacidad de respuesta ante las necesidades del servicio y garantiza que la prestación se desarrolle en condiciones de continuidad y calidad, optimizando el uso de los recursos disponibles.

Este planteamiento se alinea con la práctica seguida por numerosas comunidades autónomas y municipios que cuentan con establecimientos similares y que, en los últimos años, han evolucionado desde modelos de gestión directa hacia fórmulas concesionales para la explotación de sus albergues y refugios juveniles, al constatar que este tipo de contratos proporciona una organización más adaptada a las características operativas de estas instalaciones.

La actividad que se desarrolla en los albergues implica procesos propios del ámbito hotelero y recreativo, tales como la atención continuada al usuario, la restauración, la gestión de reservas, la planificación de estancias y el mantenimiento de las instalaciones. Estas características los acercan a la lógica de funcionamiento de los establecimientos turísticos, sujetos a ritmos variables, picos de ocupación y necesidades inmediatas de reorganización de recursos. Si bien la Administración puede asumir estas funciones, su estructura interna y el marco jurídico aplicable al personal público y a la contratación no siempre permiten adaptarse con la agilidad necesaria a estas exigencias. Por ello, resulta razonable considerar que operadores con experiencia en el sector turístico y hotelero pueden ofrecer una gestión más ajustada a las particularidades de los albergues juveniles, garantizando su funcionamiento eficiente sin desnaturalizar en modo alguno su finalidad pública.

Los albergues juveniles, aunque cumplen una función social y educativa esencial, presentan igualmente una marcada naturaleza económica. Generan ingresos derivados del alojamiento y la manutención, están expuestos a fluctuaciones estacionales y del mercado y requieren estrategias de ocupación, comercialización y gestión propias del ámbito turístico.

La participación de un operador especializado permite introducir una mayor profesionalización en la gestión. Estos operadores disponen de sistemas avanzados de organización, protocolos de calidad consolidados en el sector turístico y herramientas tecnológicas orientadas a la gestión de reservas y la atención al usuario. Asimismo, cuentan con capacidad para seleccionar, organizar y adaptar los equipos de trabajo a las necesidades reales de la instalación, lo que facilita una explotación más eficiente y estable. La flexibilidad inherente a este modelo permite ajustar los recursos humanos y materiales en función de la demanda, reforzando la dotación en los periodos de mayor ocupación y reestructurándola en las fases de actividad reducida.

El hecho de que el concesionario asuma el riesgo operacional constituye un elemento adicional de eficiencia. La Administración mantiene su función de supervisión y control del servicio, pero no soporta los riesgos económicos derivados de la variabilidad de ingresos o de los costes de explotación diaria, lo que contribuye a una gestión más sostenible y ajustada a la realidad del servicio.

El tránsito desde la gestión directa hacia una gestión indirecta mediante concesión no implica un cambio en la titularidad pública del servicio, sino una adaptación del modelo organizativo y de la modalidad de gestión que permitirá responder adecuadamente a las exigencias del servicio. Este cambio permite que los albergues juveniles funcionen con continuidad, con niveles homogéneos de calidad y con la flexibilidad operativa que requiere su actividad.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la concesión de servicios

constituye la modalidad más adecuada, eficiente y proporcionada para garantizar la prestación del servicio, por lo que se considera necesario tramitar el presente contrato que permitirá una gestión de los albergues y el refugio juvenil acorde con los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa

Fecha	LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)
A fecha de firma	LA DIRECTORA GENERAL DE JUVENTUD Firmado digitalmente por: CASTILLA RODRÍGUEZ LAURA Fecha: 2026.03.24 12:12